



LA UNIFORMIDAD DE LA REGISTRACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS MUNICIPALIDADES PARA SENTAR LAS BASES DE UNA MÁS CORRECTA Y OBJETIVA DISTRIBUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DE IMPUESTOS

La Legislatura de la Provincia adoptó una decisión sustentada en la lógica y experiencia de la contabilidad pública, con el fin de dotar de uniformidad a la registración y rendición de cuentas de los municipios, como modo de sustentar una correcta y objetiva distribución de la participación municipal en los ingresos de naturaleza fiscal.

La cuestión basal consistió en sentar bases comunes de registración y rendición, que permitiesen juzgar en igualdad a todas las cuentas de las municipalidades, de tal modo que los movimientos hacendales y las situaciones patrimoniales tuvieran una lectura contable idéntica cualquiera fuese la comuna analizada.

Tal unidicidad resulta imprescindible en la aplicación de los índices de distribución, ya que una registración que obedece a criterios diversos según el caso, puede llevar a una distorsión en la aplicación de un mismo índice, con lo que el sistema reglado de asignaciones se desvirtúa.

Por ello el acierto de la Ley de Presupuesto Provincial 6871, que en su Art. 60 encomendó al Tribunal de Cuentas emitir una resolución que contemplase la uniformidad de criterios en la registración y rendición de cuentas de los municipios que permitiese:

“a) Propender al análisis cuantitativo y cualitativo del movimiento presupuestario comparado, de las finanzas municipales.”

“b) Evaluación y obtención de coeficientes que permita ayudar a la redistribución de la maza coparticipable, guardando criterios de uniformidad y equidad.”

“c) Obtener por parte de los municipios, un mejor control de sus acreencias coparticipables en las liquidaciones que la Provincia les efectúa por este concepto.”

“d) Prever sanciones por el incumplimiento de las obligaciones formales que se deriven del presente artículo.”

El Tribunal había emitido con fecha 21 de diciembre de 1999, el Acuerdo N° 2988 en el cual establecía requisitos uniformes de registración y de rendición de cuentas, para todos los organismos de su ámbito de control, entre ellos, los municipios.

A fin de cumplir acabadamente con el mandato legal, formuló, sobre la base de un proyecto consensuado con los Contadores Municipales, la Clasificación Económica y por Objeto del Gasto de las Erogaciones y Recursos Presupuestarios para las Municipalidades de la Provincia.

Dicha Clasificación se puso en vigencia, a través del Acuerdo N° 3278 cuyo detalle de rubros y contenidos se consignan en los Anexos III y IV de dicha pieza legal, estableciendo el uso obligatorio del mismo como Plan de Cuentas para la contabilización de los recursos y erogaciones presupuestarias, el cual debe ser utilizado uniformemente en los distintos subsistemas contables de cada municipio.

Asimismo, dispuso que dichos organismos debían adoptar la clasificación por Finalidad y por Función establecida en los Anexos 1 y 2 del Decreto Provincial N° 3159/79 (t.o.), e instruyó sobre la formulación de la Clasificación Institucional de las erogaciones, que responda a la estructura organizativa de cada ente.

Estableció, además, un Plan de Cuentas Patrimonial para todos los municipios a nivel de Rubros.

Como complemento de las normas citadas anteriormente y, atento a que el control de la determinación, transferencia y registración de la participación municipal es objetivo permanente de auditoría para las Direcciones de este Tribunal que controlan las cuentas de la Administración Central y de las Municipalidades, en sus respectivas incumbencias, este Tribunal también dictó el Acuerdo N° 3274.

Este Acuerdo establece que Contaduría General de la Provincia deberá remitir al Tribunal de Cuentas y a las Municipalidades en forma mensual y en forma anual, toda la



información contable sobre la Distribución de los Recursos Participables del período realizada de acuerdo a la normativa en vigencia, respetando los requisitos que favorecen la eficiencia de su control. Idéntica información deberá remitir respecto de los fondos que por cualquier otro concepto y afectación (subsidios, aportes, fondos de terceros, etc.) son transferidos a los municipios por otras dependencias del Gobierno de la Provincia, del Gobierno Nacional o de otras entidades gubernamentales o no, nacionales o extranjeras, registrados en su sistema contable.

También dispone que los municipios deben unificar el Plan de Cuentas utilizado para el registro de las transacciones de las que trata (conceptos participables, subsidios y cuentas de terceros), utilizando cuentas que sean representativas de los conceptos asignados por Contaduría General y del origen del financiamiento.

De tal modo el Tribunal estima haber aportado una reglamentación imprescindible para la aplicación de los índices de participación municipal, ajustada a los objetivos previstos en la ley respectiva, como así contribuido a perfeccionar los sistemas contables y dar mayor transparencia a las gestiones comunales en punto a la Hacienda controlada.